

dad. No hay delito pequeño. Esta es la razón de ser de los modelos policíacos de “cero tolerancia”.

El grado de responsabilidad depende del nivel de influencia y poder ejercido. Todos los miembros de la sociedad nacional tienen responsabilidades, pero el alcalde tiene más que el jefe de la policía y éste más que el jefe de manzana o el director de escuela. El padre de familia la tiene sobre el adolescente. La autoridad federal sobre la estatal; el ministro sobre el magistrado. Que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda: nada más ni nada menos, pero sin olvidar que el “agua siempre cae de arriba hacia abajo”.

La impunidad es la incubadora de la inseguridad. Sea del delincuente, de la autoridad o el ciudadano, sin consecuencias de sus acciones u omisiones, genera la reproducción de la conducta.

Ojalá que estas ideas, que no son sino el producto de alguna experiencia, observación y reflexión de la realidad, sean de alguna utilidad para entender mejor lo que sucede y plantear un tema fundamental: cuando la forma en que venimos navegando no nos permite avanzar lo que requerimos, se hace necesario navegar en forma distinta. Queda claro que si seguimos haciendo las cosas en formas y maneras que hasta ahora nos han dado resultados insuficientes; por más que invirtamos por ese mismo camino, no tendremos dividendos.

México está cambiando. Las estructuras de poder están en transición. Los esquemas tradicionales de control social están en transformación, desde la familia o la escuela, hasta el sindicato, el ejido, la comunidad religiosa o los partidos políticos, que ya no son lo que eran y todavía no alcanzan su nueva versión. Es el camino y el costo de la evolución democrática, pero también la oportunidad que plantea, y en esto último debemos fincar nuestro optimismo. Como diría el famoso poeta Paul Valery, “el futuro ya no es lo que era antes”.

3. La Conexión Colombia-México-Estados Unidos

Bruce Bagley

Este artículo analiza los momentos clave en la evolución dinámica del comercio de droga Andino-Mexicano-Americano en las últimas dos décadas, poniendo particular

énfasis en la conexión México-Colombia y tomando en cuenta los factores principales que explican porqué al comienzo del siglo XXI, México se ha convertido en el violento epicentro del contrabando de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos.

Durante las últimas dos décadas, los grupos de crimen organizado mexicano se han involucrado poco a poco en el comercio de cocaína originado en los Andes y en Colombia, concentrándose en el tránsito de cocaína refinada de Colombia a través del territorio Mexicano, para introducirla en los Estados Unidos. A comienzos del nuevo milenio, los grupos criminales mexicanos han efectivamente desplazado a los “cárteles” colombianos de Medellín y Cali, así como a sus herederos, los llamados “cartelitos” que quedaron tras el desmantelamiento de los grandes monopolios en los años noventa.

Estados Unidos se sigue manteniendo como el mayor mercado mundial de cocaína. Se estima que aproximadamente cada año, 350 toneladas métricas de cocaína (de un total de producción anual de alrededor de 1,000 toneladas métricas) son consumidas por alrededor de 6 millones de usuarios estadounidenses, los cuales gastan 40 mil millones de dólares anualmente en este proceso. De modo que el total del mercado de droga ilícito en Estados Unidos podría llegar a \$150 mil millones anuales.

Se calcula que las organizaciones criminales mexicanas han ganado por lo menos 15 mil millones de dólares anualmente, con la posibilidad de llegar hasta 25 mil millones de dólares en los mejores años, dependiendo del precio del mercado, cuando las ganancias del contrabando de cocaína se suman a las ganancias derivadas de otras drogas dentro de este comercio ilícito, las cuales son previamente cultivadas y manufacturadas en México (especialmente la marihuana, heroína/opio y metanfetaminas). Este multimillonario mercado ha generado una sangrienta competencia por su control entre los seis principales cárteles mexicanos (Sinaloa, Golfo/Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva y la Familia Michoacana) y docenas de bandas menores. Durante los últimos tres años esta competencia ha desatado una guerra pandillera brutal en México, que ha dejado 6,290 homicidios solamente en 2008, cifra que se suma a las 3,200 muertes relacionadas con la droga en 2007 y las 1,807 ejecuciones por droga que tuvieron lugar en los primeros tres meses de 2009. Desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia el primero de diciembre de 2006, se cuentan al menos 11,297 asesinatos relacionados con las drogas ilícitas en México.

El alcance y la intensidad de los vínculos de los cárteles mexicanos con el comercio de droga andino se han expandido y evolucionado desde inicios de la década de los noventa. Durante esos años, los mexicanos se ubicaron como intermediarios entre los productores andinos y quienes controlaban el mercado al interior de Estados Unidos.

Primeros contactos

Debido a la creciente demanda de cocaína en los Estados Unidos durante las décadas de los setenta y ochenta, aparece en Colombia el primer gran cártel conocido como el

“Cártel de Medellín”, seguido por su competidor, el “Cártel de Cali”. Durante esos veinte años, tanto el cártel de Medellín como el de Cali logran controlar rápidamente la exportación de cocaína desde los Andes hacia los Estados Unidos. Así, ambos se dan a conocer como las más poderosas y despiadadas organizaciones criminales del hemisferio occidental. Ambos comienzan sus empresas de contrabando por vía aérea, importando clandestinamente la “base” o “pasta” (pasta básica) desde el sur de los Andes, especialmente desde la región del Alto de Huallaga en Perú (en donde se origina 65% de la producción mundial de coca) y desde la región del Chapare en Bolivia (donde se produce 25%) hacia Colombia. En este país se refina el producto, que es trasladado por vía marítima, utilizando buques de carga o botes rápidos, o por vía aérea a través del Caribe, con destino en el sur de la Florida. De allí, a través de redes criminales que emplean automóviles, camionetas o aviones, se distribuye a los Estados Unidos.

Durante la primera mitad de la década de los ochenta, los vínculos desarrollados por los cárteles de Medellín y Cali, les proporcionaron una gran riqueza. De ello resultó, además, un incremento en la violencia y la aparición de la “narcopolítica”.⁴ Durante esta época, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se implicaron también en la producción y refinamiento de coca, principalmente como “protectores” de los campesinos que la cultivaban. También asumieron el papel de “guardias” de los cárteles en operaciones de refinación, ayudando a la vigilancia de las pistas de aterrizaje ilegales en el campo colombiano. Como resultado de su posición dominante dentro del boom del comercio de cocaína, los cárteles colombianos eran incuestionablemente más ricos y poderosos que los grupos criminales de México, los cuales estaban entonces relacionados solamente con la producción, el contrabando de marihuana y heroína, así como de su comercio hacia el mercado americano.

En respuesta al flujo de cocaína comercializada a través del Caribe desde Colombia, el presidente Ronald Reagan creó en 1982 el grupo de trabajo del sur de Florida (*South Florida Task Force*) y designó al entonces vicepresidente George H. W. Bush a la cabeza del mismo. En un esfuerzo para poner fin al tráfico de cocaína colombiana en el Caribe, este grupo de trabajo tenía como objetivo coordinar – por primera vez – la aplicación de la ley federal y los activos militares en la declarada, por el mismo presidente, “Guerra contra las Drogas”. Para financiar esta guerra, el presidente designó los activos locales y estatales. Hacia la mitad y finales de los ochentas, este grupo de trabajo tuvo eventualmente un gran éxito al reducir de forma importante el tráfico de cocaína proveniente de Colombia hacia Florida y el sureste de los Estados Unidos por las islas caribeñas.

⁴ Muchas fuentes estiman que los dos cárteles colombianos tenían ganancias que ascendían a 4 mil millones de dólares anualmente, desde inicios de los años ochenta, cuando se expande el “boom” del consumo de cocaína en Estados Unidos.

La profundización de la participación de las organizaciones mexicanas en el comercio de cocaína andino

En 1984, los sicarios del cártel de Medellín bajo las órdenes del capo Pablo Escobar, asesinan al entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Acto seguido y para evitar las furiosas represalias del gobierno del presidente Belisario Betancourt, los poderosos cárteles de Medellín y Cali escapan a Panamá por algunos meses. Mientras se escondían en Panamá, los capos descubrieron un nuevo socio en el negocio criminal, el dictador panameño general Manuel Antonio Noriega. Debido a su posición de jefe de Estado, la situación geopolítica de Panamá y las facilidades que brinda su Canal, Noriega se encontraba en una posición idónea para facilitar sus actividades de contrabando de cocaína. Por lo que hacia mediados y finales de los ochentas, los traficantes colombianos, con la complicidad de Noriega, comenzaron a reordenar sus operaciones de tráfico de cocaína fuera del Caribe, a través de Panamá, América Central, México y, posteriormente, a través de la frontera norte de México, hacia los Estados Unidos.

Los conflictos armados de Centroamérica en la década de los ochenta, particularmente la guerra clandestina “Contra”, patrocinada por la administración Reagan y la CIA en contra de los sandinistas en Nicaragua, generaron condiciones caóticas a través de toda América Central. Este caos facilitó el involucramiento de los Contras en el tráfico de la cocaína a través de la región, lo que les permitió financiar sus actividades clandestinas. Pistas remotas de aterrizaje en Honduras, Guatemala, e incluso Costa Rica fueron usadas por los colombianos, a menudo con la cooperación de oficiales corruptos de los gobiernos locales, hacia el norte de México. Con ello se abrió un nuevo corredor estratégico para la exportación de la cocaína a Estados Unidos.

Los cárteles colombianos comenzaron a resentir la constante presión ejercida por el grupo de trabajo del sur de Florida en el Caribe. Por lo cual, hacia fines de los ochenta, en lugar del Caribe, los cárteles colombianos utilizaron a América Central y México, regiones que se convirtieron en la ruta preferida para el envío de la cocaína. Inicialmente, los colombianos simplemente pagaban una tarifa fija a los funcionarios de gobierno de América Central y México, así como a las organizaciones criminales, por sus servicios de asistencia en las operaciones de tránsito.

La primera organización mexicana en involucrarse de manera profunda en el tráfico de cocaína colombiana fue el “Cártel de Juárez”, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, conocido también como el “Señor de los Cielos”. Este apodo lo adquiere porque construyó una gran flota aérea para transportar la cocaína colombiana de América Central a través de la frontera de México-Estados Unidos. El cártel de Juárez fue rápidamente seguido por otras organizaciones mexicanas traficantes, como por ejemplo el “Cártel de Tijuana”, que se consolida bajo el mando de los hermanos Arellano Félix.

En 1989-1990, se combinan importantes acontecimientos ocurridos tanto en América Central como en Estados Unidos, que cambiaron la situación, reduciendo el

rol de Centroamérica en el contrabando de cocaína expandiendo, al mismo tiempo, la importancia de la conexión de los cárteles con México. El vicepresidente en turno George H. W. Bush, se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1989. En diciembre de ese mismo año ordena una invasión a Panamá. Como parte de esta operación, se captura al general Noriega, poniendo punto final a su participación en el tráfico de cocaína. Es importante tomar en cuenta que durante los primeros meses de su presidencia y antes de invadir Panamá, el presidente Bush optó por cortar su ayuda a los Contras, decidió más bien apoyar el proceso de paz llamado Esquipulas II, encabezado por el presidente costarricense Oscar Arias. Finalmente, entre 1990 y 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se inició el reestablecimiento del control estatal en América Central.

La caída de los cárteles colombianos

Simultáneamente, la industria cocalera colombiana sufre cambios mayores dentro de su propia estructura, facilitando así una mayor participación a los traficantes mexicanos. En agosto de 1989, el capo Pablo Escobar manda asesinar en las afueras de Bogotá al entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. En represalia, el presidente en turno, Virgilio Barco Vargas, le declaró una guerra total al cártel de Medellín, y, con el apoyo de los Estados Unidos, lanzó una campaña militar en contra de Pablo Escobar y toda su organización. Mientras tanto, en 1991, Pablo Escobar inició negociaciones con el gobierno colombiano, acordando una rendición basada en su estancia temporal en cautiverio. Su encarcelamiento, que el mismo financió, se llevó a cabo en la prisión llamada irónicamente “La Catedral”, localizada en Envigado, Antioquía, justo fuera de Medellín. En 1992, burlándose del gobierno, Pablo Escobar escapó de su propia cárcel y reinició sus actividades de contrabando de cocaína. De inmediato se formó un “bloque de búsqueda” para perseguirlo. Escobar fue encontrado y asesinado por las fuerzas de seguridad colombianas el 3 de Diciembre de 1993, con la participación substancial de los Estados Unidos.

En los inicios de 1994, el asesinato de Escobar, junto con el inmediato arresto de la mayoría de los otros capos del cártel de Medellín por las fuerzas colombianas, deja a los miembros del cártel de Cali, quienes habían cooperado con las autoridades en la caza de Pablo, en una posición dominante en la industria de la cocaína. Sin embargo, para mediados de 1995, la presión proveniente tanto de las autoridades colombianas como de las estadounidenses, las cuales exigían la aplicación de la ley hacia el cártel de Cali, obligó a sus jefes, los hermanos Rodríguez Orejuela, a aceptar los términos de negociación que les ofrecía la administración del entonces presidente Ernesto Samper. La rendición efectiva de los dos principales jefes del cártel de Cali en 1995 marcó el final de la era de dominación de los dos cárteles, Medellín y Cali, en el comercio de cocaína en Colombia. Este logro se llevó a cabo a pesar de que la adminis-

tración de Samper se había viciado desde el inicio del mes de agosto de 1994 por acusaciones de que había aceptado 6.1 millones de dólares del cártel de Cali para su campaña electoral, buscando asegurar un acuerdo favorable.

Esto no significó el final del papel jugado por Colombia en el tráfico de cocaína. De hecho, a mediados de la década de los noventa, Colombia logra rápidamente suplantar a Perú y Bolivia como el mayor productor de coca de los Andes. Esto sucede gracias a las acciones del gobierno del presidente de Perú, Alberto Fujimori. Durante los inicios de la década de los noventa, el gobierno de Fujimori comienza a derribar aeronaves transportadoras de pasta básica provenientes del valle del Alto de Huallaga en Perú y la región del Chapare de Bolivia, destinados a los laboratorios dentro del territorio de Colombia, interrumpiendo efectivamente el puente aéreo previamente establecido entre Perú y Colombia. Contrarrestando estas interrupciones, se desarrolla en Colombia un boom de cultivos de coca en los llanos orientales y en las regiones de la cuenca del Amazonas en el este y sur del país. Por ello, a inicios de 2000 Colombia ya cultivaba un estimado de 90% del suministro disponible de coca en la región.

La caída de los cárteles de Medellín y Cali dejó un vacío en el comercio de cocaína colombiana. Algunos traficantes colombianos buscaron reconstruir los cárteles mayores de los restos del cártel de Medellín (por ejemplo, el cártel del Milenio, encabezado por Alejandro Bernal a finales de los noventa) o Cali (como el cártel del Valle del Norte, cuyo jefe es Don Diego, que desde los noventa hasta la fecha monopoliza el negocio de la coca). Pero la mayoría de estos esfuerzos fracasaron porque los cárteles grandes, prominentes y violentos, atraen demasiada atención de las agencias antinarcóticas y de inteligencia colombianas y estadounidenses. Como consecuencia, este vacío fue rápidamente llenado por un número proliferante de “cartelitos”. Gracias a sus esfuerzos por evitar su detección y arresto, los cartelitos fueron capaces de asumir un perfil menos violento en la sociedad y en la política, por lo que, hacia el año 2000, existían ya en Colombia aproximadamente 300 pequeños cartelitos que llenaban eficazmente el espacio dejado por el desmembramiento de los cárteles Medellín y Cali. Solamente el cártel del Norte del Valle logró sobrevivir hasta el año 2008, perseguido por las fuerzas colombianas y estadounidenses.

Estos nuevos cartelitos cedieron el control del cultivo y procesamiento de coca en la zona rural colombiana a la guerrilla izquierdista de las FARC y a la organización paramilitar derechista de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las FARC y las AUC controlan la mayoría de las áreas de cultivo de coca en las zonas rurales de Colombia, empleando su poder de fuego, mientras mantienen una sangrienta guerra interna por la manutención y expansión del control territorial. Enfocados principalmente en la exportación de la cocaína refinada obtenida de las FARC y de las AUC, pero con capacidades logísticas muy disminuidas en comparación con Medellín y Cali, los cartelitos quedaron cada vez más atomizados, lo que los forzó a forjar alianzas y relaciones

comerciales con organizaciones criminales y traficantes fuera de Colombia, creando así nuevos espacios y oportunidades para los mexicanos, que rápida y entusiastamente ampliaron su poder, ubicándose en un lugar dominante en el negocio.

El alza de los traficantes de cocaína mexicanos

Durante la segunda mitad de los noventa grupos mexicanos comenzaron a incursionar en el negocio de la cocaína, primero en Juárez, bajo la dirección de la familia Carrillo Fuentes y luego en Tijuana, con la familia Arellano Félix. Estas familias se involucraron progresivamente, sobre todo en el comercio de cocaína fuera de Colombia. Al principio de la actual década, los primeros acuerdos alcanzados por Medellín establecían que la paga a las organizaciones mexicanas consistía en una tarifa fija por sus servicios. Viéndose en desventaja, las organizaciones mexicanas comenzaron a exigir una mayor participación en las operaciones de contrabando. En lugar de fuertes tasas como pago, comenzaron a demandar la mitad de cada cargamento de cocaína colombiana. En intercambio, las organizaciones mexicanas garantizaban la entrega en los Estados Unidos de la otra mitad a los cartelitos colombianos. Si fallaban, los colombianos eran compensados por sus pérdidas a un precio previamente acordado. Bajo estos nuevos términos, las organizaciones mexicanas rápidamente profundizaron su involucramiento en el negocio altamente lucrativo de distribución de cocaína en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se enriquecieron y se hicieron más poderosas y violentas. Cuando menos desde el año 2000, los cárteles mexicanos dominan y concentran las mayores ganancias.

Los cárteles de Juárez y Tijuana no fueron las únicas bandas de traficantes que buscaron enriquecerse por el boom del tránsito del comercio de cocaína de Colombia a México. En los primeros tres años de su sexenio, el presidente Vicente Fox —que fue el primer presidente no perteneciente al PRI en 71 años— lanzó una campaña gubernamental contra el creciente poder y violencia de los cárteles de Juárez y Tijuana. Sus éxitos contra ambos cárteles, se debieron en gran parte a la exitosa transición del PRI al PAN, pues se dio una ruptura en los patrones tradicionales de soborno entre los elementos partidistas tradicionales que formaban el gobierno mexicano y los grandes cárteles, debilitando claramente tanto a Juárez como a Tijuana. Aún más, las iniciativas anticárteles de Fox produjeron la muerte de uno de los hermanos Arellano Félix, la captura de otro, y el arresto de varios capos de Juárez. El presidente Fox ganó elogios de Washington y de la administración de George W. Bush, pero no logró eliminar a las dos organizaciones completamente. No obstante, creó nuevas oportunidades para otras bandas mexicanas rivales que buscaban expandir su participación en el comercio de cocaína.

En la primera mitad de la década de 2000, dos organizaciones traficantes relativamente menos prominentes —El cártel de Sinaloa encabezada por Joaquín “El

Chapo” Guzmán Loera y el cártel del Golfo capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén-, se movieron enérgicamente contra los cárteles de Juárez y Tijuana, con un éxito considerable, logrando forjar sus propios contactos entre los cartelitos colombianos y también con traficantes colombianos en Perú y Bolivia. Los cárteles del Golfo y Sinaloa establecieron nuevas rutas de contrabando por aire y tierra a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo. También lucharon violentamente para conseguir el control de plazas y puntos clave a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente en Tijuana y Juárez.

Para el año 2003, los cárteles de Sinaloa y el Golfo se transforman en los más dinámicos, poderosos, y brutales en el comercio de cocaína mexicana, suplantando exitosamente a los cárteles de Tijuana y Juárez. Pronto, estos dos cárteles se convirtieron en violentos rivales, cuando Sinaloa se esforzó por arrebatar el control de la plaza del cártel del Golfo de Nuevo Laredo-Laredo, que había sido controlada hasta entonces por Osiel Cárdenas y su grupo. El cártel del Golfo respondió en 2003 con el asalto violento al cártel de Sinaloa en su zona de control, contratando como sicarios a fuerzas especiales desertoras del ejército mexicano –los infames Zetas– para realizar operaciones de represalia como venganza en contra de Sinaloa y al Chapo, por lo que ascienden las ejecuciones y escalan los niveles de violencia entre los cárteles mexicanos.

Mientras tanto, a pesar de sus heridas, los cárteles de Juárez y Tijuana respondieron con violencia al cártel de Sinaloa en un intento desesperado por mantener su precaria situación en el comercio de cocaína. En suma, nuevas organizaciones (como La Familia michoacana) en otros estados mexicanos han surgido para pelear por el mercado. Se dan nuevas luchas dentro de los grupos establecidos como el de Sinaloa (que vio a la familia Beltrán Leyva quebrarse debido al liderazgo del Chapo) que han producido una gran fragmentación interna y muchas luchas dentro de los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, junto con un complicado conjunto de alianzas cambiantes entre las varias bandas criminales, que se disputan los \$15 mil millones de dólares al año que genera el comercio de droga en el interior de México.

Causas y consecuencias de las guerras mexicanas de drogas

La presente lucha brutal por el control dentro y entre las organizaciones traficantes mexicanas es básicamente por las ganancias generadas por el tráfico de drogas. Es el producto de la confluencia de varios factores que han hecho de México el nuevo epicentro del tráfico de cocaína de Colombia y los Andes hacia los Estados Unidos. México se ha convertido en la vía preferida para el tránsito de la cocaína colombiana debido a los éxitos logrados por la administración del presidente colombiano Álvaro Uribe, especialmente a partir de 2002, cuando lanza su programa de Seguridad Democrática con apoyo del Plan Colombia. Debido al consumismo estadounidense,

México se encuentra ahora en el epicentro de esta guerra sin cuartel, perjudicado además por su cercanía a los Estados Unidos.

La propia transición política de México del PRI al PAN generó un quiebre en el control sobre las líneas tradicionales de soborno de los cárteles hacia los líderes políticos. La eliminación de estos “controles” permitió grandes oportunidades de expansión por parte de grupos de traficantes de México, sin las trabas anteriormente aplicadas por el PRI, que había mantenido por largo tiempo el tráfico de drogas en México dentro de los límites “tolerables”.

La aplicación de la leyes mexicanas, que ha sido estructuralmente débil, aunada a las carencias del sistema penal y de justicia, que históricamente han estado plagados por la corrupción y el soborno, dan como resultado un marco institucional completamente inadecuado para confrontar los retos presentados por las organizaciones traficantes de droga, que se aprovechan y benefician de estas debilidades.

Además, hasta hace poco Washington casi no había hecho nada para apoyar a México en su solitaria lucha contra el tráfico de droga dentro de su territorio. Washington tampoco había hecho mucho para controlar la compra y venta de armas de los Estados Unidos hacia México, o para detener el flujo, ida y vuelta, de las grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo entre los Estados Unidos y las organizaciones mexicanas. Aunque es una medida parcial, la aprobación de la Iniciativa Mérida en 2008 constituye un primer paso hacia una nueva era en la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de tráfico de drogas. Además, la mayoría de los analistas concuerdan que el paquete de ayuda de 1,400 millones de dólares es totalmente insuficiente para lograr éxitos rápidos.⁵ Dada las dimensiones de este fenómeno, los problemas que México enfrenta como resultado de la conexión con Colombia, la Iniciativa Mérida representa sólo el comienzo de un gran esfuerzo cuyos resultados aún están por verse.

⁵ Liz Harper, “Blog Drug Flashback: U.S. Foreign Policy and the Drug War,” en *Americas Quarterly: The Policy Journal for our Hemisphere*, April 8, 2009. <http://americasquarterly.org/obama-drug-legalization-mexico>.